



Jessica Henríquez D.

Aunque ya no es la rectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), a María Alejandra Benavides la siguen llamando de esa forma. Al menos algunos profesores, alumnos y personal administrativo del establecimiento que le mandan mensajes o la contactan telefónicamente para saber cómo está, para hacerle consultas o para contarle cosas que están ocurriendo en el plantel.

Desde que dejó el cargo —a mediados de abril fue suspendida y en julio se le pidió la renuncia— los hechos de violencia han aumentado en el plantel: es común que encuchados salgan del colegio a tirar bombas molotov y cortar el tránsito, overoles blancos han incendiado la inspectoría, hay amenazas a los profesores y rociaron de bencina a un docente. También el clima interno de convivencia se ha enrarecido, al punto que cuatro inspectores fueron despedidos luego de criticar la gestión del rector interino, Gonzalo Saavedra, el mismo que en un audio que se filtró dijo que el plantel “parece colegio diferencial, más del 60% de los hueones son TEA”.

“Tengo mucha pena y frustración por ver cómo lo que hicimos con mucho esfuerzo, de conectar con los jóvenes para bajar los temas de violencia y hacer andar el colegio, se va a la basura. Frustra ver el deterioro del INBA, porque es un colegio que tiene un potencial enorme”, dice Benavides, quien por primera vez habla públicamente desde los hechos del 23 de octubre de 2024, cuando 35 alumnos terminaron quemados en un baño del colegio por la explosión de bombas molotov.

“Han pasado más de nueve meses de ese episodio, han ocurrido muchas cosas y se ha dicho mucho de mí. Ya es tiempo suficiente para contar el otro lado de la historia, de cómo hemos vivido todo este tiempo”, dice reflexiva mientras se toma un jugo en un céntrico café de Santiago.

Llevaba 30 meses como directora del INBA cuando ocurrió la explosión que dejó a nueve alumnos con riesgo vital, cargo al que había llegado por Alta Dirección Pública (ADP). Luego de los hechos señaló que lo ocurrido era “un hecho aislado”. Esa fue su última declaración pública en el marco de un punto de prensa a primera hora del 24 de octubre, junto a varias autoridades (ente ellas el ministro de educación, Nicolás Cataldo). La frase la persigue hasta hoy. El entonces candidato —hoy alcalde de Santiago— Mario Desbordes, adelantó que si llegaba a la alcaldía la sacaría del cargo. “Ella es parte del problema”, señaló.

“Hoy sigo con terapia y fármacos”

Hoy Benavides está en un litigio laboral con la municipalidad porque le pidieron la renuncia por mala evaluación. “Apenas ocurrida la explosión, el municipio inició un sumario que fue cerrado sin imputarme cargos ni responsabilidades administrativas. En diciembre cambió la administración y en marzo me entero por la prensa que se reabrió el sumario. Al mes siguiente el nuevo fiscal me



FOTOGRAFÍA: CLAUDIO CORTÉS V.

María Alejandra Benavides: “Me intentaron linchar”

La exrectora del INBA habla por primera vez desde la tragedia ocurrida el 23 de octubre del año pasado, cuando 35 alumnos terminaron quemados en un baño tras manipular bombas molotov. A casi 10 meses, cuenta su historia.

notifica de mi suspensión del cargo”, cuenta.

—¿Qué pasó desde entonces?

—Tuve que recurrir a la AChS porque me dio una crisis ansiosa, y tras un estudio, me diagnosticaron una enfermedad laboral producto de todo lo vivido desde octubre en adelante, por lo que me dieron licencia médica. En paralelo se inició el proceso de evaluación de desempeño de todos los directores municipales de Santiago. No pude recabar toda la información para la evaluación porque no estaban las condiciones para ello, y el 2 de julio, a través de un correo electrónico, me pidieron la renuncia por mala evaluación, pero no está resuelto aún, entonces estoy en un limbo. Hoy sigo con terapia y fármacos.

—Pero en lo penal estás imputada en el caso de la explosión y le requisaron el teléfono. ¿Por qué?

—No tengo ninguna información más allá de la declaración que di el mismo día de los hechos a la fiscal Macarena Cañas y al fiscal de flagrancia que llegó hasta el colegio.

Luego me requisaron el teléfono sin darme razones. Mi abogado tuvo una audiencia ante el tribunal para pedir explicaciones a la fiscal de por qué se operó de esa forma y ahí ella admitió que no me habían informado que estaba imputada.

—¿Y por qué esta imputada?

—La fiscal dijo que recogió una declaración de un funcionario público que asegura que dije: “Sabíamos que esto iba a pasar” y que no hicimos nada.

—¿Y usted sabía que algo así podía pasar?

—El ambiente en este tema siempre fue una preocupación en el INBA. Durante los tres años que fui rectora, todos los días tenía comunicación en la mañana con Carabineros, con el comisario, con el coronel, con los suboficiales en terreno. Desde hacía meses que el personal policial ya no se apostaba al costado del liceo, sino que un par de cuadras más abajo, pero estábamos siempre comunicados. Así que cuando partieron las capu-

chas dentro del colegio, llamé a Carabineros y acudieron inmediatamente.

Lo que vino después, con la explosión, dice Benavides “fue terrible”.

“En el baño había un grupo de chicos, algunos probablemente sacándose capuchas, cuando llegó otro grupo de jóvenes (también encapuchados) arrancando y que entró al mismo baño. Yo estaba fiscalizando los patios, y con el subdirector nos fuimos a las afueras del baño y les empezamos a decir jóvenes, salgan del baño. Estaba en la puerta del baño cuando sentí la primera explosión. De inmediato apareció una lengua de fuego que prendió el piso, porque había mucha bencina derramada, se me prendieron las zapatillas y parte de mi pantalón, que empezó a quemarse. Empecé a gritarles que salieran, que quienes no podían salir, gritaran... empezaron a salir jóvenes quemados, todo era llamas, fuego y explotaban cosas”.

“Algunos padres nunca quisieron hablar conmigo”

—En esta estampida hubo algunos que intentaron ir a una piscina para tirarse allí, pero tenía agua estancada.

—Sí, pero había una inspectora que lo impidió y los derivó a los camarines, donde abrieron las duchas con agua helada. Ese fue un primer lugar de contención. Otro lugar de contención fue la enfermería y un tercer lugar fue el “Patio Siberia”, donde llegaron más de 15 ambulancias y los alumnos fueron atendidos por los paramédicos sobre las mesas de ping pong de concreto que están allí.

A esa altura, Benavides ya había alertado a Carabineros y al director de Educación Municipal de entonces, Rodrigo Roco, quienes coordinaron el llamado de las ambulancias. “Uno de los encargados de las ambulancias fue quien comenzó a definir los niveles de gravedad y se hizo cargo de la derivación de los chicos. A nosotros solo nos pidieron una persona que confirmara las identidades de cada estudiante herido y que desocupáramos el colegio”, señala.

—Hubo profesores que, dada la gravedad, llevaron a algunos alumnos a centros asistenciales cercanos en sus autos particulares.

—Cuando me enteré, di la orden de que nadie más saliera. Eso fue muy criticado, pero la normativa así lo establece. Un niño herido de gravedad no puede ser trasladado por particulares, la norma lo dice. La orden no era por negar atención a los niños, al contrario, era por la seguridad de los propios niños. Además ya venían las ambulancias. Nosotros no teníamos ninguna capacidad para determinar con exactitud el nivel de gravedad de los alumnos. Yo, en lo personal, no lo podía determinar. Jamás en mi vida había visto un cuerpo quemado. Solo veía que estaban quemados y que hablaban, que estaban conscientes. Pero cuando luego me dicen que hay nueve en riesgo vital, era imposible tener esa evaluación. Mi mayor miedo durante los primeros 15 días fue que no tuviésemos ningún niño fallecido, eso me devastó.

—¿Cómo fue el encuentro con los padres de estos niños?

—Duro, muy duro. Hay apoderados con

quienes nunca pude conversar porque nunca quisieron hablar conmigo, y yo lo respeté. Me culpaban por mi rol de directora, que cómo era posible que no lo hubiere evitado. Hubo un grupo de padres que sí quiso conversar y fui a verlos al lugar donde sus hijos estaban hospitalizados. No fueron conversaciones fáciles, pero eran necesarias y había que contarles lo que había ocurrido ese día. Estuvimos en contacto durante todo el tiempo en que los chicos estuvieron hospitalizados e incluso permitieron que yo pudiera verlos, y conversar con los que estaban conscientes.

Asegura que “nunca busqué el beneplácito de los papás, en ese minuto las víctimas eran los alumnos porque independiente de las responsabilidades que había, eran menores de edad que estaban quemados. Pero también les explicamos que el colegio tenía que iniciar las investigaciones internas que correspondían y que ellos tenían derechos legales”.

—Aplicar Aula Segura.

—Claro. La Superintendencia de Educación instruyó que en la medida que los alumnos fueran saliendo de la hospitalización iniciáramos las investigaciones. Se los explicamos y los padres lo entendieron. 16 de ellos salieron de Cuarto Medio, pero un número importante se cambió de colegio.

“Rondaron mi casa”

—¿Y en lo personal? Entiendo que recibiste amenazas de muerte.

—Sí, tuve que cerrar el año escolar de dos de mis hijas porque fuimos amenazadas. Cuando fui a la Mutual de Seguridad (a visitar a los alumnos hospitalizados allí) me intentaron linchar. Me tuve que resguardar en la Teletón, en el edificio de al lado, porque me quisieron pegar y me gritaban “sabemos dónde estudian tus hijas”, “vas a pagar por esto”.

—¿Quiénes te amedrentaron?

—Había algunos estudiantes, pero también había adultos allí. También rondaron mi casa, pegaron carteles con mi foto con leyendas como: “Ella les denegó la ayuda, ella es la responsable”, “Benavides, por sacar capuchas, quemaste personas”. De hecho, tuve que hacer una denuncia ante Carabineros que llegó a la fiscalía. Eso significó prácticamente encerrarnos en la casa durante un tiempo.

—El día de la tragedia dijiste que lo ocurrido “era un hecho aislado”, frase que se interpretó como bajarle el perfil.

—Nunca hubo intencionalidad de bajarle el perfil. Lo ocurrido fue un hecho de violencia y eso es un delito. Yo quería contextualizar que la tendencia de este tipo de hechos venía a la baja y que si bien eran hechos delictuales, en ese minuto estaban radicados en una minoría. Lo dije antes de la tragedia y lo ratifico ahora: no voy a conversar con quién ha decidido taparse la cara y manifestarse violentamente. Es imposible. Si alguien dialoga con ellos en ese contexto, efectivamente es parte del problema. Nunca dialogué en esa línea, lo que hice fue ordenar el colegio y eso dio resultado. Pasamos de un 2022 con 100 salidas muy masivas a la calle, a un 2023 con 22 salidas, aunque solo una parte termi-



Estaba en la puerta del baño cuando sentí la primera explosión. De inmediato apareció una lengua de fuego que prendió el piso, porque había mucha bencina derramada, se me prendieron las zapatillas y parte de mi pantalón”.



Mi mayor miedo durante los primeros 15 días fue que no tuviésemos ningún niño fallecido, eso me devastó”.

nó en enfrentamientos con Carabineros. En 2024, hasta el 23 de octubre, teníamos tres salidas incendiarias por parte de grupos muy pequeños. Pero la frase fue muy mal usada.

—¿Ves una intencionalidad política del alcalde Desbordes porque te habías definido como una mujer “de izquierda”?

—No comento intenciones del alcalde, no corresponde. Soy de izquierda, así como soy de Colo-Colo y me gusta determinada música. Nada de eso define mi profesionalismo. Mira, yo trabajé en Lo Barnechea cuando Felipe Guevara y Cristóbal Lira fueron alcaldes. La directora de Educación en ese minuto, Francisca Johansen —a quien después el Presidente Piñera nombró directora de Educación Pública— me llamó para que me hiciera cargo de una escuela nocturna que en el día funcionaba como escuela de segunda oportunidad para niños infractores de ley, y cuya población mayoritaria era de Cerro 18. Trabajamos sin ningún problema.

—Volviendo a la tragedia del INBA: convergamos que ese día había alumnos que se taparon la cara, que iban con molotov y que alguna de esas bombas incendiarias podría haber terminado en una micro quemando gente.

—Sí, y eso es delito. Puede ser una minoría, pero es un problema. Cuando llegué al colegio dije que todo aquel que fuese sorprendido, participando o trayendo elementos para la fabricación de molotov se le iba a aplicar la norma que correspondía. Y así fue. Varios de los chicos quemados tenían procesos abiertos por diferentes motivos, algunos causas cerradas y otros en situación de condicionalidad. La Fiscalía tiene toda esa información, porque en el allanamiento se llevaron todo el historial de cada uno de los 35 alumnos.

—¿Cómo sientes que ha operado la justicia en este caso?

—Poco podría decir porque estoy ciega en este ámbito, pero es frustrante que se me instale como imputada sin tener información del proceso. Ha sido injusto cargar con toda la exposición que ha significado, tanto yo como mi familia, sin tener antecedentes concretos.

—También hubo críticas de profesores del INBA a su gestión.

—Hay docentes que desde el día uno manifestaron su disconformidad con mi llegada, algunos mandaron una carta a la entonces alcaldesa (Iraci Hassler) para anular el concurso público que gané, otros me dijeron que con suerte iba a durar dos años. Fue duro, pero también había profesores, cuyo número cada vez se fue ampliando más, que se metió en la dinámica de hacer funcionar el colegio; que hubiera clases, que se cumplieran los horarios, acercarse a los jóvenes, escucharlos y ponerles límites. Nuestra tarea es pedagógica, no policial. No hay que tenerles miedo a los jóvenes, hay que acompañarlos diciéndoles que hay reglas claras que se deben cumplir y hacerlas cumplir. Mire, el mejor ejemplo de eso es lo que me ocurrió con un niño de la generación del 2023. Cuando se graduó, me dio las gracias porque me dijo que cuarto medio había sido el año en que más clases había tenido.